

República de Colombia
Rama Judicial



Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, veintiséis (26) de agosto dos mil veintidós (2022).

Auto Interlocutorio No.267

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00464-00
DEMANDANTE:	JUAN DAVID YEPES TULANDE Y OTROS
	luisal964@hotmail.com
DEMANDADO:	NACIÓN- RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y POLICÍA NACIONAL.
ASUNTO	RECHAZA MEDIO DE CONTROL – CADUCIDAD

MAGISTRADO PONENTE: **EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS**

1. OBJETO DE LA DECISION.

Ha venido a la Corporación el proceso de la referencia, para efectos de resolver la admisión del medio de control de Reparación Directa.

2. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado los señores Juan David Yepes Tulande y Otros demandan a La Nación- Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, por los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión a la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Juan David Yepes Tulande.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

La presente decisión se adopta por la Sala de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del C.P.A.C.A., en tratándose del tipo de decisión enlistada en el numeral 1 del artículo 243 ibídem: “(...) 1. El que rechace la demanda. (...)”.

3.2. Oportunidad para presentar la demanda y la caducidad.

El artículo 164 del C.P.A.C.A., establece la oportunidad para presentar las demandas, indicando para los medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa como oportunidad lo siguientes términos:

“OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.

La demanda deberá ser presentada:

1. (...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(...)

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha señalado la finalidad de la caducidad en el ordenamiento jurídico como “una sanción en los eventos en que determinados medios de control no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional”¹, haciendo énfasis en que la figura de la caducidad tiene como fundamento la seguridad jurídica, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo.

Como consecuencia jurídica de la configuración de la caducidad el legislador contempló la imposibilidad de poner en conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativo las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, lo anterior se desprende el artículo 169 del C.P.A.C.A., el cual establece:

“Artículo 169. Rechazo de la Demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.”

3.3. Contabilización del término de caducidad en los casos de privación injusta de la libertad.

En cuanto a la forma en que se debe contabilizar el término de caducidad en los asuntos que versan sobre la privación injusta de la libertad como en el caso que nos ocupa el Consejo de Estado² en pronunciamiento del 24 de febrero de 2017, estableció lo siguiente:

“.... En ese contexto, en **los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la**

¹ Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A – C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera - Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número: 20001-23-39-003-2015-00565-00(59291)

² Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A – C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico - Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número: 05001233300020140111201 (57007)

ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente, no de la denuncia penal instaurada, como propone la demandada, puesto que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido.

Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad –y por ende, declaró la ilegalidad de la medida- no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”.

De acuerdo a las anteriores normas y la posición establecida por el Consejo de Estado se tiene que el medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para pretender la declaratoria de responsabilidad patrimonial estatal en los eventos de privación injusta de la libertad.

4. CASO CONCRETO

- **Privación injusta de la libertad.**

Para admitirse la demanda de reparación directa por regla general debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que ocurrió el hecho u omisión, o desde que se tuvo o debió tener conocimiento de la situación, el cual para los casos en que se versan en privación injusta de la libertad su conteo inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que despoja de legitimidad la privación de la libertad pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño.

Así mismo, tenemos que el numeral 1 del artículo 161 del CPACA establece la conciliación como requisito de procedibilidad, evento en el cual, el término de caducidad se suspende según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, hasta que (i) se logre el acuerdo conciliatorio, o (ii) el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que sea exigido por la ley, o (iii) se expidan las constancias de que trata el artículo 2 de la misma ley, o (iv) venza el término de tres meses contados desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero, siendo clara la normar al advertir que la suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

En el sub-lite, el término de caducidad de dos años empezó a correr a partir del 25 de octubre de 2018 (anexo) día siguiente de la ejecutoria del Auto Interlocutorio No. 77, mediante el cual se precluyó la investigación contra el señor Juan David Yepes Tulande por los delitos de daños en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales (spoa 76122600016720160030800) es decir, que

a partir del 25 de octubre de 2018 los demandantes tuvieron pleno conocimiento que la privación de la libertad del señor Yepes Tulande podía tornarse injusta, por tanto, la oportunidad para proponer la demanda contra el Estado vencía el 25 de octubre de 2020.

El anterior término se suspendió a causa de la presentación de la **solicitud de conciliación extrajudicial el día 30 de enero de 2020** hasta la fecha en que se expidió la constancia que declaró fallida la conciliación **el 18 de marzo de 2020-** (anexos). Para entonces había transcurrido 1 año, 3 meses y 5 días y aún restaban 8 meses, 25 días, que vencían el 7 de diciembre de 2020.

Así las cosas, el plazo para **acudir a la jurisdicción se extendió hasta el 7 de diciembre de 2020** y como **la demanda se instauró el 22 de abril de 2021**, según consta en el acta de reparto (anexo), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y, por ello, se deberá rechazar la demanda frente a las pretensiones por la privación injusta de la libertad.

En este punto de la decisión considera la Sala pertinente hacer la precisión porque en el caso particular la suspensión de términos de prescripción y caducidad establecida en el Decreto Legislativo No. 564 de 2020, (15 de abril 2020) *“Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, no aplica en el caso particular.

El artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, señaló:

“Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios control o presentar demandas ante la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia penal. [...]”. (Negritas fuera de texto).

El anterior Decreto Legislativo se declaró ajustado a la Constitución en sentencia C-213 de 1o. de julio de 2020, proferida por la Corte

Constitucional³, salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el párrafo del artículo 1º *idem*, que declaró inexecutable.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdos PCSJA20 Nos. 11517 de 15 de marzo⁴, 11518 de 16 de marzo⁵, 11519 de 16 de marzo⁶, 11521 de 19 de marzo⁷, -11526 de 20 de marzo⁸, 11527 de 22 de marzo⁹, 11528 de 22 de marzo¹⁰, 11529 de 25 de marzo¹¹, 11532 de 11 de abril¹², 11546 de 25 de abril¹³, 11549 de 7 de mayo¹⁴, 11556 de 22 de mayo¹⁵ y 11567 de 5 de junio¹⁶, todos de 2020, suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo del mismo año por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia COVID-19.

Posteriormente, la referida Corporación mediante Acuerdo No. PSCJA20-11581 de 27 de junio de 2020¹⁷, dispuso el levantamiento de los términos judiciales a partir del 1 de julio de ese año.

De lo anterior, la Sala infiere que el cómputo del término de caducidad se mantuvo suspendido desde el **16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020**, y se reanudó a partir del **1 de julio del mismo año**.

Adicionalmente, se advierte que el Decreto Legislativo estableció una excepción garantista para el cómputo del término de prescripción y caducidad **respecto de los casos en que el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior**

³ Corte Constitucional, sentencia C-213 de 1o. de julio de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo, “[...] sí, en términos generales, este decreto legislativo busca salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema judicial para la protección de sus derechos y mecanismos de acceso a la administración de justicia, particularmente, en lo relativo al conteo de los términos de prescripción y caducidad, ante la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. Con tal propósito, este decreto legislativo instituye, en términos generales, las siguientes medidas: (i) suspensión de términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal; (ii) el conteo de su reanudación cuando el plazo para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad fuera inferior a treinta (30) días; (iii) aclaración que la suspensión de términos prevista en el decreto no es aplicable en materia penal; y, (iv) suspensión de términos procesales para el desistimiento tácito y los términos de duración del proceso, así como su reanudación [...]”.

⁴ “Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”.

⁵ “Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”.

⁶ “Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas en la Corte Constitucional”

⁷ “Por medio del cual se proroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del mes de marzo del año 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública”.

⁸ “Por medio del cual se proroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública”.

⁹ “Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en la Corte Constitucional”.

¹⁰ “Por medio del cual se suspenden términos de actuaciones administrativas en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y direcciones seccionales de administración judicial”.

¹¹ “Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en el Consejo de Estado y en los tribunales administrativos”.

¹² “Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública”.

¹³ “Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.

¹⁴ “Por medio del cual se proroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.

¹⁵ “Por medio del cual se proroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.

¹⁶ “Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.

¹⁷ “Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el levantamiento de términos previsto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020”.

a **30 días**, evento en el que se concedió un (1) mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, para realizar la actuación correspondiente.

En el caso concreto, como ya se detalló la parte demandante tuvo la oportunidad de radicar la demanda **hasta el 7 de diciembre de 2020**, con lo cual se concluye que los demandantes no cumplen los supuestos fácticos para la aplicación de la excepción prevista en el Decreto Legislativo No. 564 de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, dado que la parte demandante no presentó el medio de control en la oportunidad habrá que rechazarse de la demanda, tal como se expuso.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

1. **RECHAZAR** la demanda presentada por los señores Juan David Yepes Tulande y Otros demandan a La Nación- Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional.
2. **RECONOCER** personería para actuar como apoderado de la parte demandante, al abogado Luis Alfonso Salazar Saray identificado con cédula de ciudadanía No. 94.250.649 y tarjeta profesional No. 181.484 del C.S.J.¹⁸, en los términos y para los efectos a que alude el memorial poder presentado.
3. **EN FIRME** este proveído, procédase al archivo del expediente previa cancelación de su radicación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Providencia discutida y aprobada en Sala de decisión de la fecha. Acta No. 73

LOS MAGISTRADOS,

(firmado electrónicamente)
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

(firmado electrónicamente)
OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA

(firmado electrónicamente)
GUILLERMO POVEDA PERDOMO

¹⁸ Consultados lo Antecedentes Disciplinarios del profesional no le aparece restricción alguna para el desempeño de la profesión Certificado No. 620740 – “Que revisados los archivos de Antecedentes Disciplinarios de la Comisión, así como los del Tribunal Disciplinario y los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no aparecen registradas sanciones contra el (la) doctor (a) LUIS ALFONSO SALAZAR SARAY identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 94250649 y la tarjeta de abogado (a) No. 181484.” Bogotá, D.C., DADO A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)